Importe: 50.000 PTS
Instructor: ANTONIO RIVERA MOLINA

Nombre: JOSE A. PEREZ RIVAS
Dirección: LA SANTA MARIA, 8 -ALCALA GUADAIRA-(SEVILLA)
Asunto: NOTIFICACION DE INCOACION EXPTE. J-00693/97
Precepto infringido: ART. 141 B) LEY 16/87
Importe: 50.000 PTS
Instructor: ANTONIO RIVERA MOLINA

Nombre: ANTONIO MORENO AL CALDE
Dirección: SANTO DOMINGO, 1 -CHURRIANA VEGA-(GRANADA)
Asunto: NOTIFICACION DE INCOACION EXPTE. J-00767/97
Precepto infringido: ART. 141 B) LEY 16/87
Importe: 50.000 PTS
Instructor: ANTONIO RIVERA MOLINA

Nombre: PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A.
Dirección: SAN MIGUEL -EL PARADOR-(ALMERIA)
Asunto: NOTIFICACION DE INCOACION EXPTE. J-00890/97
Precepto infringido: ART. 141 B) LEY 16/87
Importe: 50.000 PTS
Instructor: ANTONIO RIVERA MOLINA

Las personas relacionadas anteriormente disponen de los siguientes plazos:

Quince días hábiles para presentar alegaciones respecto de notificación de incoación de expediente.

Un mes para interponer recurso ordinario ante el Director General de Transportes de la Junta de Andalucía respecto a la notificación de resolución.

Dos meses para interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, respecto a la notificación de resolución de recurso ordinario o de alzada.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dispondrán del plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de la resolución o de la notificación de la resolución de recurso ordinario o alzada, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Jaén.

Caso de no hacerlo se procederá a su exacción por vía ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán a partir de día siguiente de la publicación del presente edicto, de conformidad con lo previsto en la LRJAP y PAC (30/1992).

Jaén, 3 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1997, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la Propuesta de Resolución, relativa a expediente sancionador que se cita. (121/97).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación de la Propuesta de Resolución que tiene formulada esta Delegación Provincial en el expediente sancionador núm. 121/97, incoado a doña M.^ª Carmen Ortiz Rachón, con domicilio últimamente conocido en Carretera de Lora, núm. 27, de Cantillana (Sevilla), se advierte que tiene un plazo de 15 días desde la presente publicación para presentar las alegaciones que en defensa de sus derechos estime oportunas en la Sección de Procedimiento de

esta Delegación Provincial de Salud de Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.º planta.

Sevilla, 12 de noviembre de 1997.- El Delegado, José Mena Robles.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 30 de julio de 1997, de la Dirección General de Protección Ambiental, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo que se cita. (El-NP-148).

CONSIDERACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO

La Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental y su Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, establecen la obligación de formular Declaración de Impacto Ambiental sobre los proyectos de obras, instalaciones y actividades de las comprendidas en el Anexo Primero de la mencionada Ley 7/1994, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización, o en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad. Asimismo, la Ley 28/1988, de 29 de julio, de Carreteras, dispone en su artículo 9, que a los proyectos de nuevas carreteras les será de aplicación lo establecido en la legislación estatal de Evaluación de Impacto Ambiental.

La actuación proyectada afecta a las provincias de Cádiz y Sevilla de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que, en virtud de lo indicado en el artículo 9.1 del Decreto 292/1995, anteriormente citado, la competencia para tramitar y resolver el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental queda atribuida al Director General de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente.

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental fue iniciado con la presentación por parte de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de la Memoria-Resumen del proyecto ante la Dirección General de Protección Ambiental el 20 de mayo de 1996, remitiendo al mismo tiempo copia de la misma a los Delegados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Huelva y Sevilla, para que la cursaran a las respectivas Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente.

Por parte de la Consejería de Medio Ambiente se procedió a llevar a cabo el período de Consultas Previas que establece el artículo 16 del Decreto 292/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La relación de consultados, un resumen de las respuestas recibidas y consideraciones de la Consejería de Medio Ambiente se recogen en el Anexo I. La Dirección General de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, en virtud de lo indicado en el artículo 17 del Decreto 292/1995 antes citado, remitió el 14 de noviembre de 1996 dichas respuestas a la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y, asimismo, se le indicó en un informe los aspectos más importantes que debían ser abordados en el Estudio de Impacto Ambiental.

Posteriormente, la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, el 18 de diciembre de 1996, en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo II del vigente Reglamento General de Carreteras, de 2 de septiembre de 1994, remitió a la Dirección General de Protección Ambiental un ejemplar del Estudio Informativo, solicitando informe sobre el mismo. En el mis-